

Benito Rozas (o en caso de cese el Director del Grupo Escolar, don Filiberto Villalobos, de Béjar) en concepto de Secretario y como Vocales el Capellán don Domingo Yuste, de las Hermanitas de Ancianos Desamparados de Béjar, la Directora del Grupo Escolar «La Antigua» doña Claudia González, don Angel García Sánchez, el mismo fundador don Emilio Muñoz y sus hijos doña Elisa, doña Juana y don Alvaro Muñoz Díaz, todos ellos con la forma de sustitución puntualizada en los Estatutos;

Resultando que la Fundación referida ha sido clasificada como de beneficencia particular, sometida al Protectorado del Ministerio de la Gobernación por Orden ministerial de 15 de enero del año corriente:

Considerando que, según dispone el artículo 71 de la vigente Ley del Impuesto de Derechos Reales de 21 de marzo de 1958, corresponde a este Ministerio de Hacienda resolver los expedientes de exención del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas, y por delegación del señor Ministro—según añade el artículo 277 (4) del Reglamento— al Director general de lo Contencioso del Estado:

Considerando que, conforme al artículo 70, letra E), de la misma Ley, están exentos del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas los que de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas se hallen afectos o adscritos a la realización de un objeto benéfico de los enumerados en el artículo segundo del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, siempre que en él se empleen directamente los mismos bienes o sus rentas;

Considerando que la Fundación «Muñoz Díaz-Pro-Infancia de Béjar» ha sido reconocida como de beneficencia docente de carácter particular por la Orden ministerial de que se ha hecho mérito;

Considerando que los bienes están directamente adscritos a la realización del fin benéfico por ser de la propiedad de la Fundación, aunque es de observar que según se manifiesta en el referido capítulo VI de los Estatutos los títulos en que consiste el capital fundacional no se hallan depositados en forma intransferible en un establecimiento bancario a nombre de la Institución, sino al del propio fundador, por lo que debe corregirse esta irregularidad, acatando de este modo lo que ya se previene en el número segundo del acuerdo ministerial de clasificación, dictado por la Orden que ha sido mencionada.

La Dirección General de lo Contencioso del Estado acuerda declarar exento del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas los anteriormente relacionados, propiedad de la Fundación «Muñoz Díaz-Pro-Infancia de Béjar».

Madrid, 22 de marzo de 1963.—El Director general, José María Zabia y Pérez

RESOLUCION de la Dirección General de Tributos Especiales por la que se autoriza a la Asociación Nacional de Inválidos Civiles para celebrar una tómbola en Zaragoza, de carácter benéfico.

Por acuerdo de este Centro directivo, fecha 23 de febrero último, se autoriza a la Asociación Nacional de Inválidos Civiles para celebrar una tómbola en Zaragoza, de carácter benéfico, y cuya duración será del 8 de abril al 6 de mayo del corriente año, en la que habrán de expedirse 60.000 boletos al precio de dos pesetas la unidad; debiéndose sujetar los procedimientos de la misma a cuanto previenen las disposiciones vigentes.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás que corresponda.

Madrid, 23 de marzo de 1963.—El Director general, Francisco Rodríguez Cirugeda.—2159.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando y Defraudación de Barcelona por la que se hace público el fallo que se cita

Por la presente se notifica a doña Aida Ester Collazo y a su esposo, don Angel Sabaté Cordonier, cuyo último domicilio conocido fue en Barcelona, calle Capitán Arenas, número 70, ático, segunda, el que abandonaron en 17 de febrero de 1963 para trasladarse a Puerto Rico, fijando allí su residencia, que la Comisión Permanente de este Tribunal, en sesión del día 20 de los corrientes, y al conocer el expediente de defraudación número 1.212/62, instruido con motivo de la aprehensión del coche marca «Renault 4-1», matrícula francesa 416 AZ-66, dictó el siguiente acuerdo:

1.º Declarar cometida una infracción de defraudación comprendida en el caso 12 del artículo 11 de la Ley de 11 de septiembre de 1953, y considerada de menor cuantía, en relación con la Ley de 31 de diciembre de 1941 y artículo 142 de las Ordenanzas de Aduanas.

2.º Declarar responsable de la misma en concepto de autora a doña Aida Ester Collazo.

3.º Declarar que se aprecia la atenuante cuarta del artículo 14.

4.º Imponer a doña Aida Ester Collazo una multa de sesenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesetas (69.768 pesetas), equivalente al límite mínimo del grado inferior, y en caso de insolvencia la correspondiente sanción de prisión, declarando la responsabilidad subsidiaria de su esposo, don Angel Sabaté Cordonier, en orden al pago de la multa impuesta.

5.º Reconocer derecho a premio a los aprehensores.

6.º Devolver el coche a la inculpada y para su inmediata reexportación, previo el pago de la multa impuesta y dentro del plazo reglamentario, declarando en caso contrario afecto el coche a las responsabilidades del expediente.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, preclaramente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el plazo de quince días a contar de la fecha en que se publique la presente notificación, y contra dicho fallo puede interponerse recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación, en el plazo de quince días, a partir del de la publicación de esta notificación, significándole que la interposición del recurso no suspende la ejecución del fallo.

Asimismo se les requiere para que bajo su responsabilidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y Defraudación, de 11 de septiembre de 1953, manifiesten si tienen o no bienes con que hacer efectiva la multa impuesta. Si los poseen, deberán hacer constar los que fueren, enviando a la Secretaría de este Tribunal una relación descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle para llevar a cabo su embargo, ejecutándose dichos bienes si el plazo de quince días hábiles no ingresan en el Tesoro la multa que les ha sido impuesta. Si no los poseen, o poseyéndolos no cumplen lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de libertad, a razón de un día por cada diez pesetas de multa y dentro de los límites de duración máxima a que se contrae el número cuarto del artículo 22 de la Ley de Contrabando y Defraudación.

Barcelona, 23 de marzo de 1963.—El Secretario.—Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente.—1.122.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 27 de marzo de 1963 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el pleito contencioso-administrativo número 7.305.

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, la sentencia dictada en 7 de diciembre de 1962 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el pleito contencioso-administrativo número 7.305, promovido por don Modesto Piñero Riquelme contra Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de 10 de mayo y 22 de septiembre de 1961, sobre aprobación de proyecto reformado de galería de conducción de aguas del pantano de Compuerta, en el río Carrión, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos que, no dando lugar a la alegación de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado, desestimamos este recurso seguido por la representación de don Modesto Piñero Riquelme contra Ordenes ministeriales de Obras Públicas dictadas en 10 de mayo y 22 de septiembre de 1961, la primera sobre aprobación de proyecto reformado de galería de conducción de agua, y la segunda, denegatoria de su reposición, por ser ambas conforme a Derecho, y, en su virtud, las declaramos firmes y subsistentes, absolviendo de la demanda a la Administración General del Estado, sin hacer expresa imposición de costas.»

Madrid, 27 de marzo de 1963.—El Oficial Mayor, Joaquín de Aguilera.